



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**“EFICACIA DE LA DIRECTIVA N ° 0010 – 2015- ONAGI – DGAP - EN
LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN LA
REGION DE LA LIBERTAD”**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTOR:

MOSTACERO ATO, ROSMERY EMPERATRIZ

ASESOR:

DR. OSCAR HUMBERTO MORENO RUBIÑOS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO CONSTITUCIONAL

TRUJILLO-PERÚ

2018

PAGINA DEL JURADO

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

DEDICATORIA

A Wilder Dante Mostacero León por ser un excelente ser humano y abnegado padre y sobre todo por siempre priorizar mis estudios; y a Mery Santos Ato Estrada por ser una madre maravillosa y apoyarme en todo ; a mis queridos y insufribles hermanos mayores por hacer de mi infancia un desastre ; y a mis traviesos sobrinos por siempre dejarme sin dinero cada fin de mes ; y a mis peluditos : Layka , Balto y Nala.

AGRADECIMIENTO

A mis padres por brindarme absolutamente todo su apoyo y su eterno amor.

DECLARACION JURADA DE AUTENTENCIDAD

Yo , Rosmery Emperatriz Mostacero Ato con DNI 48257703 , a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideras en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo ,Facultad de Derecho , Escuela de Derecho , declaro bajo juramento que La tesis que tiene como nombre “EFICACIA DE LA DIRECTICA 0010 – 2015 EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN LA REGIONAL DE LA LIBERTAD” es de mi completa autoría.

En tal sentido me responsabilizo de cualquier falsedad, plagio, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada.

Trujillo, 24 de octubre de 2018

Rosmery Emperatriz Mostacero Ato

DNI° 48257703

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado

Tengo el agrado de oportunidad a ustedes , con el propósito de presentar y exponer mi tesis la cual lleva por nombre “EFICACIA DE LA DIRECTIVA 0010 – 2015 EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN LA REGIONAL DE LA LIBERTAD”.

Con el presente trabajo se busca cumplir con uno de los objetivos que se ha trazado la Universidad, como es el promover a la investigación de los alumnos buscando la obtención del título de abogado al culminar la carrera de derecho.

EL propósito de esta investigaciones establecer la ineficacia de la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP en el otorgamiento de garantías efectivas para la protección de los derechos los derechos a la integridad física y psicológica.

Es el deseo que el presente trabajo cumpla con las exigencias y las establecidas para su desarrollo.

Rosmery Emperatriz Mostacero Ato.

ÍNDICE

PAGINA DEL JURADO	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
DECLARACION JURADA DE AUTENTENCIDAD	5
PRESENTACIÓN	6
RESUME	9
ABSTRACT	10
I. INTRODUCCION	11
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA	11
1.2. TRABAJO PREVIOS	12
1.2.1. INTERNACIONALES	12
1.2.2. NACIONALES	12
1.2.3. LOCALES	13
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA	14
1.3.1. TEORIAS FUNDAMENTALES:	14
1.3.2. DERECHOS HUMANOS	14
1.3.3. MARCO HISTÓRICO	21
1.3.4. ENFOQUE INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	23
1.3.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ	27
1.3.6. ALCANCES DE LA INTEGRIDAD PERSONAL	36
1.3.7. GARANTIAS PERSONALES – DIRECTIVA 0010 – 2015 – ONAGI – DGAP	39
1.3.8. DERECHO COMPARADO	42
1.3.9. LAS MEDIDAS DE PROTECCION	48
1.3.10. MEDIDAS DE COERCIÓN	52
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	55
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	55
1.6. HIPÓTESIS:	56
1.7. OBJETIVOS	56

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	58
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	58
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION.....	58
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	59
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	60
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS:.....	60
2.6. ASPECTOS ÉTICOS	61
III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	62
IV. CONCLUSIONES	67
V. RECOMENDACIONES.....	68
VI. REFERENCIAS	69
VII. ANEXOS	72

RESUME

La presente investigación titulada , tiene por objetivo establecer la eficacia de la Directiva N° 0010-2015- ONAGI-DGAP, en el otorgamiento de garantías personales para la protección de los derechos a la integridad física y psicológica , es decir si hay un correcta aplicación y cumplimiento de las resoluciones administrativas emitidas de la Prefectura Regional de La Libertad, así mismo determinar si la inexistencia de medidas de protección , asociadas a las garantías solicitadas , limita la efectividad de las garantías otorgadas y determinar si la inexistencia de medidas de coerción contra quienes realizan agresiones o amenazas contra la integridad de las personas o limita la eficacia de las garantías

La investigación asume un enfoque cualitativo, es un tema subjetivo, se basa en las observaciones directas del fenómeno, es decir del ciudadano que solicita el otorgamiento de garantías personas, de este enfoque no hay metodología estructurada.

De forma particular esta problemática se observa en la Prefectura Regional de La Libertad, es decir las resoluciones administrativas emitidas de dicha entidad nacional no aseguran eficazmente la protección de derechos fundamentales tales como el derecho a la integridad física y psicológica de la persona .

Palabras Claves: Derechos Fundamentales, Garantías Personales, Ley 1140, Ley 30438, prefecto, Dirección General de Gobierno Interior, Ex Onagi,

ABSTRACT

This research entitled, aims to establish the effectiveness of Directive N ° 0010-2015-ONAGI-DGAP, in the granting of personal guarantees for the protection of the rights to physical and psychological integrity, ie if there is a correct Implementation and enforcement of the administrative resolutions issued by the Regional government of La Libertad, as well as determining whether the non-existence of protective measures, associated with the guarantees requested, limits the effectiveness of the guarantees granted And to determine whether the non-existence of coercive measures against those who carry out aggressions or threats against the integrity of the persons or limits the effectiveness of the guarantees the investigation assumes a qualitative approach, is a subjective topic, is based on the Direct observations of the phenomenon, that is to say of the citizen who requests the granting of guarantees persons, of this approach there is no structured methodology.

In particular this problem is observed in the Regional prefecture of La Libertad, ie the administrative resolutions issued by the national entity do not effectively ensure the protection of fundamental rights such as the right to Physical and psychological integrity of the person.

Key words: Fundamental rights, personal guarantees, law 1140, Law 30438, prefect, Directorate General of Interior

I. INTRODUCCION

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

En el Perú según información proporcionada del INEI sobre denuncias de violencia familiar con maltrato físico en el Departamento de La Libertad hemos obtenido resultado 1829 denuncias ingresadas en el año 2015, asimismo en el año 2016 se ingresaron denuncias de violencia familiar con maltrato psicológico, obteniendo como resultado 2572 ,como consecuencia de estas acciones violentas se crearon gobernaciones regionales, provinciales y distritales, que son entidades del estado, que personifican al presidente de la república y al Poder Ejecutivo, en el ámbito de su jurisdicción. Las funciones principales de estas autoridades son: registrar denuncias ciudadanas sobre violaciones al derecho a la integridad física y psicológica dando como resultado la protección a estos derechos , otorgando garantías personales a personas en situaciones de riesgo, además se promueva acciones encargadas de dirigir y prevenir, controlar actos que atenten contra la salud, las leyes del Estado, además de recibir quejas y denuncias de la población y derivarlas a los órganos estatales competentes, entre otras.

El problema planteado, es que no ha sido eficaz la aplicación de la directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP, en la protección de los derechos a la integridad física y psicológica de las personas, en la Prefectura Regional de la Libertades, toda vez que se identifica los vacíos existentes en dicha Directiva, situación que solo busca persuadir al atacante de cometer actos de agresión.

Nuestra investigación resulta trascendental en la medida que está directamente ligado a la eficaz protección de los derechos a la integridad física y psicológica , de lo que se trata es de estudiar, observar y criticar si los otorgamientos de garantías personales constituyen o no un instrumento eficaz para proteger estos derechos"

Esta investigación es necesaria para los responsables del cumplimiento de las Garantías Personales, porque con su aporte se puede contribuir en que las medidas otorgadas puedan

no solo tener un efecto disuasivo, sino también de prevención, obteniendo un efecto óptimo con un eficaz resultado, cumpliéndose de esta manera con el objetivo del procedimiento administrativo, referente a la protección de los derechos fundamentales de la persona.

1.2. TRABAJO PREVIOS

1.2.1.INTERNACIONALES

- Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. Pág. 37)” (fundamento número dos, primer párrafo , manifiesta lo siguiente :

“Tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica”.

1.2.2.NACIONALES

- Tesis elaborada por el autor León Walde, Héctor León (2017) en la **Universidad Señor de Sipan** , para obtener el grado de abogado , tesis que tiene como título denominado: **“LOS EFECTOS E INEFICACIA DE LAS GARANTÍAS PERSONALES COMO DERECHO FUNDAMENTAL OTORGADAS POR LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD”**, quien concluye lo siguiente :

“Jones Alder Coronado Idrogo, ex prefecto Regional La Libertad año 2016, al ser consultado sobre el otorgamiento de la garantías personales, refiere que con las disposiciones comprendidas en la Directiva 0010-2015-ONAGI-DGAP, se pretende prevenir actos de hostigamiento o amenazas que atentan contra la libertad y los derechos fundamentales de las personas, sin embargo en esta modificación (refiriéndose a la Directiva 0010-2015-ONAGI-DGAP),

se encuentran vacíos notorios, como por ejemplo tratando de hacer el procedimiento más abreviado se ha eliminado la doble audiencia a solo una y en el caso que en esta, no asista el demandado, solo se deja constancia mediante acta, que no se puede promover el acuerdo de Compromiso de Cumplimiento Obligatorio, obviándose de esta manera tomar la declaración del solicitante, precisando que a las partes se le otorga un plazo de tres días hábiles para que presenten sus alegatos y/o medios probatorios. Situación que no ayuda a entrevistar a los asistentes a efectos de que pueda(n) manifestar sus motivos de pedido de garantías, generando inconvenientes al momento de resolver, por otro lado detalla que al momento de otorgar las Garantías Personales, la labor administrativa termina con la comunicación de la resolución a los intervinientes mediante la Comisaria PNP del Sector que domicilien.

1.2.3.LOCALES

- Tesis elaborada por el autor Viviane Salli Castillo Benites (2014) en la **Universidad Cesar Vallejo**, para obtener el grado de **ABOGADO “EFICACIA DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS”**; quien concluye lo siguiente:

“Que las garantías personales que otorga la Gobernación, no constituyen un medio adecuado para proteger eficazmente los derechos a la vida y a la integridad física, pues en un gran número de casos no impiden que la amenaza a los derechos aludidos se cumpla”.

1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA

1.3.1. TEORIAS FUNDAMENTALES:

Teoría de los Derechos Fundamentales

Alexy R. (1985) hace mención en esta teoría que su fin es investigar la organización tales como la de los conceptos de derechos fundamentales, con respecto a la influencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de la conceptualización de los derechos fundamentales.

1.3.2. DERECHOS HUMANOS

Hablar de derechos humanos, siempre es un concepto significativamente complejo, por muchas cuestiones, entre tanto las diversas connotaciones de ilustres en la materia que nos permiten tener un acercamiento al concepto general, y otros que enfatizan cuestiones o aspectos que se pueden desarrollar respecto al tema de derechos humanos. Sin embargo, es necesario y a manera concreta, entender que los derechos humanos parten de un reconocimiento, que, como tal, la pugna de los mismos tuvo significantes antecedentes históricos, para su reconocimiento, los cuales serán desarrollados con posterioridad.

Es así que el cumplimiento de los derechos humanos, ha sido y será un completo desafío para las formas políticas de gobierno actuales, ante todo en los diversos ordenamientos jurídicos que pretenden una completa protección de los mismos, amparados aún en entes extra gubernamentales que en definitiva pretenden una cooperación en la materia de defensa de los derechos humanos en su totalidad.

En tanto, en el particular contexto social en el cual nos desenvolvemos, evidentemente los esfuerzos de las autoridades competentes para aseverar el respeto a la integridad total de los ciudadanos a veces no bastan, o mayor aún, no se ve reflejado las intenciones de los diversos cuerpos normativos que pretenden el cumplimiento de ciertos parámetros que garanticen una vida estable de los ciudadanos, en concordancia de sus semejantes. A estos esfuerzos se acoplan otros factores determinantes, tales como son, los índices de pobreza, y mayor aún pobreza extrema, las clases discriminatorias, el reconocimiento de minorías y mayor aun su necesidad de protección, entre otros; factores que son determinantes para tratar de abordar un clima social de respeto, y su absoluta necesidad para forjar sociedades más justas e igualitarias.

a. DEFINICIÓN

En principio, al abordar el concepto de derechos humanos, debemos entender en *stricto sensu* como aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos por su propia condición de persona, sin importar raza, color, sexo, origen, u cualquier otra condición de la cual provenga. Incluyendo a estos derechos, indubitablemente a la vida, y la libertad, entre otros muchos; enfatizando qué, estos derechos les corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

(HURTADO POZO, 2005), nos manifiesta que “*sobre el bien jurídico de los derechos humanos, que todo sistema normativo (moral, jurídico, social) se orienta a controlar el comportamiento de las personas evitando o solucionando conflictos de intereses. Todos esos sistemas recurren a diferentes medios de reacción que restringen gravemente las libertades y bienes de las personas*”.

La esencia de los derechos humanos, entonces, recae en una estrecha relación con la dignidad y el respeto de la persona por su condición de ser humano. La sociedad, a lo largo de su proceso evolutivo histórico, reconoce a la persona una pluralidad de derechos que se adquirieron a través de distintos acontecimientos para obtener un reconocimiento, es tal que

nacen derechos que hoy en día se dividen en generacionales, priorizando siempre al respeto de la vida, la dignidad, y ante todo, el estado garantizando un ambiente de protección en todo momento para el ciudadano y sus semejantes. Es necesario a su vez, delimitar ciertos criterios y límites de acción, es decir, tener mecanismos adecuados para la realización del ser humano y sus semejantes. Son por lo tanto, indisociables del concepto de Estado contemporáneo, al menos en todo cuanto su paradigma es el Estado de Derecho. Esos conceptos fueron expresados sintéticamente en el primer párrafo de la Declaración de Viena y el Programa de Acción: “Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”. Que sean innatos es conceptualmente relevante, pero la nota determinante es que son objeto de protección por parte del Estado y que, si esta falla, hay medios de obtenerla en el ámbito internacional.

b. CARACTERÍSTICAS

UNIVERSALIDAD

Tal y como ya se ha afirmado en la breve introducción a los Derechos Humanos, cabe resaltar el ámbito de protección general que poseen todos los seres humanos por su condición de persona. En efecto, por tener la condición de ser inherentes a la persona humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos y sin importar diferencias políticas, sociales, culturales, religiosas, raciales, étnicas, de género ni de ningún otro tipo. Ciertas objeciones a la universalidad, pretendidamente basadas en la diversidad cultural, inducen a cierta descalificación conceptual de los derechos humanos, presentados como un mecanismo de penetración política o cultural de los valores occidentales. Siempre es posible, por cierto, manipular políticamente cualquier concepto, y es un hecho que a menudo los derechos humanos son invocados desde una perspectiva de doble estándar inaceptable; pero esos descabros no disminuyen ni lesionan la dignidad simétrica de la persona humana en todo tiempo y lugar. A pesar del señalado cuestionamiento, y sin duda como el fruto de la persistencia de la opinión pública internacional y de las organizaciones no gubernamentales, la Declaración adoptada en

Viena el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, explícitamente afirma que el carácter universal de los derechos humanos y la libertades fundamentales “no admite dudas”. Aunque la Declaración de Viena admite que “debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos”, también reitera sin remilgos que “los Estados tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

(GROSSMAN C., NIKKEN P., 1990) Establecen que, *“Una consecuencia de la universalidad ha sido la internacionalización de los derechos humanos”*

En efecto, los derechos humanos amparan indiscutiblemente a los seres humanos desde su concepción hasta incluso, su fallecimiento, por tanto, sin importar el lugar en el cual se puedan encontrar, sea un territorio nacional o extranjero, los derechos humanos amparan en todo momento al ser humano. Si ellos limitan el ejercicio del poder, no puede invocarse la actuación soberana del gobierno para violarlos o impedir su protección internacional. Los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía; no puede considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su promoción y protección.

Se puede decir entonces, que es evidente que los derechos humanos amparan a todos los seres humanos, ya sea como individuos, sin importar cualquiera de las características personales que puedan tener. La *Universalidad* de los derechos humanos, como característica, podría calificarse como una cualidad *erga omnes*, lo que significa que los derechos humanos son derechos de todas las personas frente a cualquier otra, o incluso ante una entidad. Haciendo un énfasis entonces, nos damos cuenta que la universalidad es una de las características más importante de los derechos humanos, ya que mediante esta facultad, la persona podrá desarrollarse libremente y sin la vulneración de sus

derechos como tal, permitiendo así, un amparo en todo momento y en cualquier situación en la cual se pueda encontrar.

INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA

Pues bien, los derechos humanos a raíz de la universalidad, nace una nueva característica no menos importante, como lo es la *indivisibilidad e interdependencia*.

Los derechos humanos, no son divisibles, tal y como la dignidad, la vida, o el respeto, son indivisibles. A postura de esta característica, no se admiten jerarquías entre los derechos humanos, es decir, no existe una súper posición entre unos y otros, de manera que, no se puede afirmar que un derecho es de mayor importancia frente a otro. Entonces, tampoco es admisible que se respeten ciertos derechos, mientras otros podrían ser vulnerados parcialmente. Esta característica radica básicamente en la necesidad del respeto de los parámetros que inciden en los derechos humanos, es decir, al hablar de derechos humanos, hablamos de características totalmente independientes unos frente a otros.

Por tal, los derechos humanos son, por el contrario, interdependientes, porque la violación de uno acarrea a menudo la violación de otros, como ocurre, por ejemplo, con el derecho a la participación política si son vulneradas la libertad de expresión o la de asociación; o con el derecho a la vida si no son satisfechos el derecho a la salud o a la alimentación.

Es entonces que tras las cuestiones generacionales a raíz de los antecedentes históricos, hablamos de los llamados derechos de primera, segunda y tercera generación, son en definitiva, derechos interdependientes, ya que la separación de estos derechos son meramente por cuestiones histórica, mas no por cuestiones conceptuales, ya que uno de primera generación, esta relacionado íntimamente con uno de segunda o tercera, y así sucesivamente.

INALIENABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD

Esta característica hace referencia al tiempo de vigencia de un derecho en relación a un ser humano, cabiendo resaltar que los derechos humanos pertenecen indudablemente a cada persona, desde su concepción hasta el día de su muerte. Mediante esta característica, nadie puede ser privado de sus derechos, bajo ninguna circunstancia, ni incluso cual sea su condición. Sin embargo, esto no impide que bajo ciertos criterios, existan ciertas limitaciones totalmente legítimas para poder ejercerlos, en tanto estos criterios serían denominados como circunstancias que exceptúan en principio a la inalienabilidad e imprescriptibilidad.

IRREVERSIBILIDAD

Esta característica hace referencia a la imposibilidad de regresar a una condición anterior a la actual, es decir, mediante esta característica se enfatiza en que los derechos son irrevocables, y así garantizar que todos los derechos los tenemos todos en general y aseguramos su respeto en todo tiempo y lugar.

En efecto, la *irrevocabilidad* hace referencia a la integridad de los derechos humanos, esto es que en definitiva, los derechos humanos son inviolables y su seguridad y respeto deben ser garantizados en todo momento. Los derechos humanos no son relativos, de tal manera que sería totalmente inconcebible que un derecho que hoy protege al ser humano, pueda ser revocado en un día posterior por algún criterio gubernamental. Esta característica tiene una concepción y estrecha relación con la ya mencionada universalidad; pero que en definitiva permite que los derechos sean respetados en su integridad y no tener así un respeto o protección parcial solamente.

Cuando un derecho ha sido reconocido y amparado por una ley, o un mandato, o cualquier otro medio derivado del poder público gubernamental, este derecho posee una cierta independencia del acto el cual lo reconoce, ya que este acto es meramente declarativo.

Esta postura parte en razón de que la tutela de los derechos humanos tiene un fundamento más allá de un acto declarativo, es decir, el principal fundamento de un derecho es la

dignidad del ser humano. Por tanto, cabe resaltar que si en algún momento o cualquier circunstancia dicho acto declarativo por parte del poder público se ve derogado, criticado o abrogado, el derecho el cual amparaba seguirá teniendo vigencia frente a otros organismos especializados internacionales que protegerán el derecho amparado con anterioridad frente a cualquier amenaza o frente a cualquier estado en el cual se puedan ver vulnerados los derechos humanos.

PROGRESIVIDAD

Tal y como se ha señalado, los derechos humanos son inherentes a la persona y a su vez su existencia no depende necesariamente de un reconocimiento gubernamental o estatal, por tanto es posible extender aún más el campo de protección de los derechos humanos, incluso a lugares en los cuales aún no se tiene un reconocimiento por parte del poder público. Es así como se establece esta característica, que principalmente radica en la constante evolución de los derechos humanos, los mismos que se configuran en relación con el contexto social en el cual se desarrollan.

(CARPIO MARCOS, 2000) “Una manifestación de esta particularidad aparece en la antes aludida cláusula de apertura constitucional que, con matices, expresa que la enumeración constitucional de los derechos humanos es meramente enunciativa y no taxativa, pues no excluye la protección de otros derechos inherentes a la persona humana que no figuran expresamente en el texto constitucional”.

(JIMENEZ DE ARECHAGA, 1988) “Esto, como se dijo, abre extraordinarias perspectivas de integración del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, pues, en los países cuyas constituciones contienen una disposición como la comentada, la adhesión del Estado a la proclamación internacional de un derecho como “inherente a la persona humana” abre las puertas para la aplicación de dicha disposición”.

Algunas concepciones, indican a la vez que la progresividad se desprende bajo dos premisas: la gradualidad y el progreso.

En primer punto, la gradualidad, nos indica que los derechos humanos no pueden ser efectivos de manera inmediata, es decir, la efectividad de un derecho requiere

básicamente un proceso de definición, ya sea en corto, medio y largo plazo, esto es para garantizar su protección en todo momento por parte del estado e instancias internacionales. En segundo lugar, el progreso, está referido a que el goce de los derechos debe mejorar siempre, perfeccionando así la protección y la efectividad de los derechos humanos en un cierto espacio y tiempo. Es así como estas dos premisas se relacionan, en tal sentido, la gradualidad significa en efecto, el reconocimiento de un derecho y el progreso es íntimamente vinculado a la evolución favorable de los derechos humanos en todo momento.

En esa dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, “si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”. Este principio representa lo que se ha llamado la *cláusula del individuo más favorecido*.

Es así que la progresividad no debe ser entendida como una exigibilidad de los derechos humanos, por tal sentido esto sería realizable de manera inmediata. Esto es, en definitiva que la identificación de un derecho humano, en una relación con la dignidad, este merece una protección inmediata como tal. La progresividad, debe ser entendida como el reconocimiento de los derechos humanos progresivamente, y en manera amplia, ya que en distintas situaciones cabe la posibilidad de amparar nuevos derechos que de por si necesitaran una protección inmediata tanto en organismos nacionales como internacionales.

1.3.3.MARCO HISTÓRICO

a. DERECHOS HUMANOS PRIMERA GENERACIÓN.

Surgieron en el siglo XVIII como consecuencia de procesos revolucionarios en Europa y América, puntualmente: la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica o independencia de los Estados Unidos. Estos derechos se ven ya reflejados en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y de Francia de 1791, que incorpora en su texto, como preámbulo o prefacio, la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” de 1789.

Son derechos individuales y, en muchos casos, personalísimos como el derecho a la vida, a la identidad, al honor, a la libertad de pensamiento y expresión, etc.; pero también derechos políticos o de participación ciudadana, siendo los fundamentales: los derechos de elegir y ser elegido. Implican un accionar “negativo” del Estado; esto significa que el estado reconoce que el individuo es sujeto de derecho y por lo tanto posee una esfera inviolable de libertad y dignidad, debiendo el Estado abstenerse de invadir esta “esfera”.

b. DERECHOS HUMANOS SEGUNDA GENERACIÓN

Surgieron a inicios del siglo XX, como consecuencia de luchas sociales, fundamentalmente de corte sindical, y en el marco de grandes procesos de transformación, como la Revolución Mexicana (1910-1917), la Revolución Bolchevique -que dio nacimiento a la Unión Soviética en 1917- o la Reforma Universitaria (Córdoba- Argentina, 1918).

Son derechos sociales y económicos, como el derecho a la jornada diaria de trabajo de 08 horas, el derecho a formar sindicatos, el derecho a la huelga, a la seguridad social, el derecho a una remuneración digna, etc. Estos derechos se ven ya reflejados en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución del Imperio Alemán de 1919 o Constitución de Weimar.

c. DERECHOS HUMANOS TERCERA GENERACIÓN

Surgieron en la década de los 60 del siglo XX, como consecuencia de la acción de movimientos pacifistas y de la preocupación universal por el destino del planeta ante la posibilidad de una guerra nuclear, extendiéndose luego a un interés por preservar el medio ambiente.

Son derechos que protegen “intereses difusos” -es decir no sectoriales, sino difundidos a nivel de toda la sociedad- o también llamados “derechos de la solidaridad”, como por ejemplo: el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, del derecho al desarrollo y el derecho a la libre determinación.

1.3.4. ENFOQUE INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

a. SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos tiene su nacimiento en la misma concepción de la ONU, dado que, frente a este organismo se encuentran adscritos casi todos los Estados del mundo.

Básicamente este sistema se desarrolla mediante un conglomerado de mecanismos orientados a la protección de los derechos de las personas. Es así que de aquí deriva el término de *universal*, ya que procede de la declaración universal de los derechos humanos y a su vez indica que estos derechos son inherentes a las personas, sin exclusiones ni discriminaciones de cualquier índole.

Para CARLOS VILLÁN; (VILLÁN, La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 60° aniversario: origen, significado, valor jurídico y proyección en el siglo XXI, 2009) la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se constituye en la primera norma sustantiva que concretó en 30 artículos el contenido de los derechos humanos y libertades fundamentales enunciados en la ya citada Carta.

Así también, VILLÁN establece que: (VILLÁN, 2011) Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios básicos en ella consagrados han ido precisándose y desarrollándose en numerosas normas positivas (sustantivas y procesales) contenidas en unos 200 tratados internacionales y protocolos, así como en innumerables normas del Derecho internacional general, normas consuetudinarias y principios generales del Derecho internacional.

La ONU es la organización internacional única en la historia, cuya vigencia aún se desprende actualmente, dado que está compuesta por 193 miembros; y es así, que es la máxima exponente de la antonomasia de las fortalezas, los retos que implican la protección de los derechos internacionalmente, así como existe el foro intergubernamental con una amplia capacidad de decisión e incluso con mayoría de recursos en el contexto contemporáneo.

b. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La Organización de las Naciones Unidas (*conocida por sus siglas ONU*) es la organización de escala internacional conformada por Estados independientes, esto es en razón, a que la ONU ha sido y seguirá siendo el pilar fundamental de la procuración de paz, la colaboración inter – gubernamental, el desarrollo cooperativo, entre otras facultades; siendo quizás la más importante, la promoción de las mejoras de la calidad de vida de los seres humanos, así como el eficaz ejercicio de los derechos inherentes a los mismos.

Posee una estructura definida por varios organismos administrativos dentro de los cuales destacan: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública principal de la ONU es el Secretario General.

La ONU surge como una organización intergubernamental que integra a la comunidad internacional y sirve de instrumento para que los gobiernos se pronuncien sobre asuntos y problemas globales, así como adoptar medidas en relación con casi todas las cuestiones que interesan a la humanidad. Estas cuestiones son analizadas de acuerdo a una serie de propósitos y principios establecidos en el capítulo 1 de la "Carta de las Naciones Unidas", teniendo como finalidades:

- Mantener la paz y seguridad nacional.
- Acrecentar las relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto a los principios de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos.
- Fomentar la cooperación internacional para resolver problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios internacionales.
- Promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
- Ser centro de armonización entre las naciones para alcanzar finales comunes.

No son ni una entidad por encima de los estados, ni un gobierno de gobiernos. No cuentan con un ejército propio y no recaudan impuestos. La Organización está sujeta a la voluntad

política de sus miembros para la aplicación de las decisiones y depende de las aportaciones de sus miembros para la ejecución de las actividades

c. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (*bajo sus siglas OEA*) ,es una organización internacional, creada y a su vez conformada por los Estados del continente americano, y tiene como propósito, poder lograr la estabilidad de los estados intervinientes, es decir, crear un ámbito de orden, paz y justicia. Así mismo, esta organización pretende fomentar la solidaridad y cooperación de los Estados, y a su vez, defender su soberanía e independencia territorial. La OEA, es una organización que se encuentra reconocida incluso en el artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas.

La Carta de la OEA, fue aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana que tuvo incidencia en Bogotá – Colombia, en el año el año de 1948. Bajo el propósito de hacer efectivo los principios por los cuales se funda, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, este organismo posee cierto propósitos esenciales como son: El afianzamiento de la paz y la seguridad del continente americano; la promoción y consolidación de la democracia, tener políticas de acción en materia de prevención para así obtener la solución pacífica de conflictos entre los estados adscritos a la Organización, promover la acción cooperativa y así realizar la activación económica, social e incluso ambiental de los estados adscritos, erradicar la pobreza en el continente, entre otros principios de no menor importancia.

La OEA está conformada por 35 países del continente de América, países los cuales son independientes y soberanos; y a su vez ratifican la carta de la OEA. Es así que los países miembros al día de hoy son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá, Belize y Guyana.

Es necesario precisar que la Carta de la Organización, además de incidir en los propósitos de la Organización; este cuerpo normativo contiene disposiciones de índole económica, social, educación, ciencia y cultura, disposiciones que van en concordancia con los Estados americanos adscritos, y que deben tener como propósito dedicar sus máximos esfuerzos para el cumplimiento de dichas disposiciones.

d. OMISIÓN Y CORTE INTERNACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es uno de los tres tribunales regionales que pretende la protección de los derechos humanos, esto es mediante una labor en conjunto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Es un órgano con función jurisdiccional autónoma, cuyo propósito es la correcta interpretación y aplicación de la convención americana. La Corte Interamericana posee una función contenciosa, dentro de los cuales está la función de la solución de casos controversiales, asimismo de poseer un mecanismo de supervisión de sentencias, también posee una función de consulta, así como de poder dictaminar medidas provisionales de protección ante posibles vulneraciones de derechos.

Actualmente, son veinte los Estados que han ratificado la competencia jurisdiccional contenciosa de la Corte; los estados que reconocen esta función son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Surinam y Uruguay.

Antes de centrarnos en el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), es preciso aproximarnos al sistema regional americano de protección de los derechos humanos. En este sentido, cabe mencionar, en primer lugar, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en 1948 y con sede en Washington. Entre sus objetivos fundacionales, destacan la búsqueda de la paz y la seguridad, la consolidación de la democracia, la promoción de los derechos fundamentales o el impulso del desarrollo social y económico. También en 1948 y en la Novena Conferencia Internacional Americana

celebrada en Bogotá, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pese a no tener carácter vinculante, adquiere gran importancia como punto de partida del sistema de protección.

Las instituciones más notorias de la OEA encaminadas a proteger los derechos humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) y la ya citada Corte.

1.3.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

La Constitución Política del Perú es la Ley fundamental del Estado y en materia de derechos humanos la Constitución Política del Perú de 1993, nos dice que el enunciado contenido en este, es el eje sobre el cual gira la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como de todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico del país. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, con más precisión, cabe expresar que la persona humana, considerada en sí misma, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de donde se deriva la obligación de la sociedad y del Estado de defenderla y respetarla

Pero más precisa la encontramos en el artículo 1 de la Constitución de 1979, en el sentido que: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla". Ya que la reconoce como, el fin supremo y que está constituido por la persona en sí misma, en base a su inherente dignidad. Por lo tanto, obliga al Estado, (a todos) a "respetarla y protegerla".

Nuestra Constitución Política, reconoce la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo le reconoce una serie de derechos, llamados Fundamentales precisamente por su constitucionalización, que no son limitados, sino más bien, enunciativos de la voluntad estatal de reconocimiento y protección de aquellos.

El estado, a través de sus agentes y autoridades, debe respetar y hacer respetar los Derechos Humanos; su vigencia es imprescindible en un sistema democrático. Ante la trasgresión de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y colectivos, la víctima, luego de optar los recursos de jurisdicción interna y reunir determinados requisitos, puede acudir a las instancias internacionales en busca de justicia y hacer recordar al Estado violador la responsabilidad internacional en el que ha incurrido.

a. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PERÚ

❖ EL HABEAS CORPUS

El Habeas Corpus es uno de los mecanismos más importantes de protección de los derechos fundamentales, que está básicamente orientado a la protección del derecho a la libertad, ya sea en una esfera física o locomotora.

Perez Luño (PÉREZ LUÑO, El derecho de hábeas corpus, 1986) nos establece que: *“es en la tradición del common law, entre los siglos XIII y XV; donde se gesta y desarrolla el writ of habeas corpus, encontrando su primer reconocimiento legislativo en Inglaterra a través de la Habeas Corpus Amendment Act de 26 de mayo de 1679.”*

A su vez nos enseña García Belaunde que, en el caso de América Latina, el hábeas corpus fue acogido tempranamente por las nacientes repúblicas -Brasil en 1830 y Guatemala en 1837- teniendo como referente el modelo inglés y alcanzando un importante desarrollo incluso mucho antes que algunos países europeos, (GARCÍA BELAUNDE, 1994).

Soria Luján señala que, si bien el hábeas corpus fue conocido en el Perú desde los primeros años de la República, se trató más bien de un conocimiento circunscrito a algunos sectores ilustrados y sin que distinguieran su naturaleza estrictamente procesal. Confundían el proceso de hábeas corpus con el derecho al cual estaba destinado a proteger, aserto que se respalda en la evidencia de referencias indistintas al derecho de hábeas corpus o a la Libertad personal (SORIA LUJÁN, 2003).

Es así que recién el 21 de Octubre de 1897, mediante una Ley, se incorpora el Habeas Corpus al ordenamiento jurídico peruano, en una concepción clásica como ya se ha determinado, que es la protección del derecho a libertad. En cuanto a los derechos amparados, el habeas corpus está destinado evidentemente a la protección del derecho a la libertad, en otras palabras, el respeto de la libertad de locomoción física o ambulatoria. Cabe resaltar que este derecho evidentemente no es absoluto, sino que admite cierto grados de limitación totalmente legítimas, que se realizan en concordancia de otros derechos fundamentales o constitucionales. Es de esta manera que el legislador puede establecer límites al derecho a la libertad, siempre que sea con fines y satisfagan principios de razonabilidad y proporcionalidad reconocidos en el último párrafo de la carta magna de 1993. Es así que la libertad se ve afectada a consecuencia de la aplicación de alguna medida que podría ser arbitraria y concedería de plano la admisión del uso del habeas corpus como proceso constitucional para hacer eficaz el derecho a la libertad personal.

Es sin duda, el desarrollo que hace el CPC del proceso de hábeas corpus reconocido en la Constitución, recoge la experiencia de muchos años en la aplicación de este proceso en el país, así como los principales desarrollos alcanzados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia. Contribuye pues a configurar un proceso de tutela de la libertad individual, ampliamente garantista, correspondiendo ahora a la jurisdicción constitucional, sobre todo en lo que le toca al Poder Judicial, el reto de consolidar este proceso constitucional como mecanismo idóneo y eficaz para la vigencia de la libertad individual.

❖ PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO

De acuerdo al artículo 200 inciso 2 de la Constitución de 1993, el amparo procede contra el hecho o la omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data.

El proceso constitucional de amparo procede contra un hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o incluso persona, que vulnera o amenaza derechos constitucionales reconocidos por la Carta Magna, que no son protegidos por los demás procesos

constitucionales. Es así que tenemos entre los tantos, por ejemplo, al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, la sindicalización, la violación de derechos ambientales, entre otros.

En términos generales, señala Yupanqui (ABAD YUPANQUI, 2004): *la Carta vigente mantiene el diseño previsto por la Constitución de 1979; no obstante, existen algunos aspectos que resulta relevante desarrollar tomando en cuenta los aportes efectuados por la jurisprudencia, particularmente, del Tribunal Constitucional.*

La Constitución ha optado por una tesis amplia en lo que respecta a la tutela de los derechos fundamentales a través del amparo, al disponer que aquel protege los derechos constitucionales distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data. El texto constitucional emplea la expresión derechos fundamentales para denominar aquellos incluidos en el primer Capítulo de su Título 1, estableciendo una aparente distinción con los restantes derechos desarrollados en otros capítulos pues a ellos no los denomina fundamentales sino sociales y económicos (Capítulo II) y políticos (Capítulo III).

(SOLOZABAL ECHAVARRÍA, 1991) *Tradicionalmente se ha admitido que los derechos fundamentales han nacido históricamente como "facultades consistentes en pretensiones de hacer, intervenir, o participar, o recibir prestaciones alegables solo frente a los poderes públicos", es decir, como "derechos públicos subjetivos". Sin embargo, en la actualidad existe consenso en reconocer su influencia en las relaciones entre particulares.*

En definitiva, el adecuado funcionamiento del amparo y su contribución al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática no solo depende de su regulación constitucional y legal. En efecto, corresponde a la jurisprudencia un rol de especial relevancia para ir avanzando y precisando los alcances de los derechos fundamentales -evitando las distorsiones existentes en el proceso de amparo (EGUIGUREN PRAELI, 2002).

Para ello, se requiere contar con órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, lo cual no sucedió durante el régimen del ingeniero Fujimori. En la actualidad, la situación ha cambiado y particularmente el Tribunal Constitucional viene aportando sólidas e importantes resoluciones que tratan de garantizar la tutela de los derechos fundamentales y el principio de supremacía constitucional.

❖ HABEAS DATA

En la norma constitucional peruana, el hábeas data es una garantía constitucional concreta destinada a proteger directamente determinados derechos constitucionales.

Se encuentra establecida en el artículo 200 inciso 3, en el que se la conceptualiza según los derechos constitucionales que debe proteger: los contenidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Ley Fundamental. Es así que se ha dispuesto que el hábeas data es una garantía constitucional que procede contra cualquier hecho u omisión de cualquier persona, funcionario o autoridad que afecta el acceso a la información requerida que en efecto, debe ser información institucional que pueda acceder cualquier ciudadano, excluyendo la información personal evidentemente..

El Habeas Data, defiende al derecho de acceso a la información pública (primer párrafo del artículo 2.5 de la Constitución). El constituyente ha previsto que toda persona tiene derecho a: "solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional". El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (segundo párrafo del artículo 2.5 de la Constitución), las cuales solo "pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado". El llamado derecho a la autodeterminación informativa (artículo 2.6 de la Constitución). Este derecho se define, en términos del texto constitucional, como aquel por el cual toda persona tiene derecho a "que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar".

Es de esta forma, que el mecanismo adecuado por el constituyente peruano, es un mecanismo procesal que se puede optar al verse vulnerado su acceso a la información pública por parte de la ciudadano, esto es en definitiva, una manera notable de obtener un acercamiento entre el estado y la sociedad, para poder así tener un presunto control constitucional de lo que se realiza con los fondos públicos en la esfera del poder público, alga los términos redundantes.

❖ PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El proceso de inconstitucionalidad, se encuentra recogido en la Carta Magna, precisamente en su artículo 200, inciso 4. Este mecanismo procede contra normas que se encuentren en rango de ley; los cuales pueden ser: Leyes, Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Reglamentos del Congreso, Normas Regionales, Ordenanzas Municipales; en donde las cuales deben estar en contra de la Constitución Política en su forma o fondo.

Este proceso le otorga al Tribunal Constitucional la competencia para poder conocer y a su vez, resolver, en una sola instancia, absolutamente todas las demandas de inconstitucionalidad.

Cabe resaltar que en la actualidad, este es uno de los procesos más utilizados, ya que su carácter vinculante resolutorio, así como en los diversos casos particulares en los cuales se han designado, los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional han sido de vital importancia para salvaguardar en todo momento la supremacía jerárquica de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales.

Es necesario resaltar la vital trascendencia de este proceso, dado que mediante el mismo, es una herramienta eficaz para poder establecer límites frente a los excesos que se puedan presentar en el poder político mediante normas o cuerpos legislativos en contra de la constitución. Sin embargo, a su vez, es necesario indicar que en un contexto socio político peruano en el cual no se desarrollamos, sería viable la aplicación de fórmulas totalmente razonables y sobre todo en concordancia con la constitución para obtener un reforzamiento al máximo de solución de controversias inconstitucionales como lo es el Tribunal Constitucional, este es a fin de evitar, tal y como se ha establecido, excesos de poder político y obtener normas conforme a los principios, valores y directrices que se albergan en nuestra Carta Magna.

❖ PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

El proceso de Acción Popular, es quizás uno de los procesos que posee mayor antigüedad dentro de los llamados *procesos constitucionales*. Este proceso posee incidencia temprana en los países de Colombia y Venezuela, aproximadamente en la segunda mitad del Siglo XIX, e inicios del XX.

Este proceso constitucional, se contempla en el artículo 200, inciso 5 de la Constitución Política de 1993, el mismo que sostiene contextualmente: *“La acción popular, procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones, y decretos de carácter general, de cualquiera sea la autoridad que la emanen”* Es así que definimos a la acción popular como un proceso constitucional, ya que está reconocido por la Constitución, como un procesos que es un claro amparo de la democracia y la justicia dentro de un contexto político – social, ya que en efecto, cualquier ciudadano goza de la legitimación para poder iniciar una acción mediante esta institución jurídica. Es entonces, sin duda alguna, que este proceso garantiza a su vez, la supremacía constitucional derivada del artículo 51 de la Constitución, artículo en el cual señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, disposiciones de menor jerarquía, y así sucesivamente.

García Belaunde (GARCÍA BELAUNDE, Garantías constitucionales en la Constitución peruana de 1993, 1994), sostiene que: *“El proceso de acción popular está pensado como “una suerte de control que ejerce cualquier ciudadano sobre el poder reglamentario de la administración pública, y más en particular, contra el Poder Ejecutivo, en la medida que la administración, mediante su propia actividad, puede vulnerar las leyes y la Constitución ”.*

Es en definitiva entonces, que el proceso de acción popular, es un mecanismo de defensa que sostiene la supremacía constitucional frente a cualquier otra normativa con rango de ley, que procede contra reglamentos, normativas administrativas, y resoluciones de carácter general, de cualquiera que se la autoridad de las cuales emanen, siempre claro, las cuales infrinjan la ley o cuando incluso, no hayan sido expedidas o publicadas en la forma tal y como lo establece la Constitución o la ley, según sea el caso (Concordancia artículo 76 de la Constitución Política del Perú)

❖ ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

El proceso constitucional de cumplimiento o también denominado como acción de cumplimiento, es un proceso que tiene como propósito, tal y como lo establece su denominación, el cumplimiento o ejecución por parte de la autoridad o funcionario público, de las normas jurídicas con jerarquía de ley y de los actos administrativos de los cuales el cumplimiento está obligado. Este proceso se incorpora a la Constitución Política del Perú de 1993, y no posee antecedentes en nuestra carta magna, es decir, no figura en ninguna de las anteriores constituciones, sin embargo, este proceso si registra antecedentes en otros países latinoamericanos, en donde se consagran una serie de mecanismos específicos para garantizar la efectividad de normas y actos administrativos.

Tal y como se ha establecido anteriormente, mediante este proceso se busca la obligación que posee el estado mediante sus distintos órganos jurisdiccionales, la obligación de cumplir lo establecido en diversas disposiciones emanadas por una autoridad competente. Cabe resaltar, que, para algunos autores peruanos, este proceso es innecesariamente contemplado en nuestra constitución, esto es pues, que se considera que bastaba tan solo con el proceso de amparo o incluso uno de inconstitucionalidad por omisión, en tanto que otros también consideran que se podría dar cabida en el ámbito de un planteamiento de proceso contencioso administrativo.

Sin embargo, a criterio personal, el propósito del constituyente evidentemente fue introducir una acción mediante se pueda garantizar la efectividad de las disposiciones legales en nuestro país, esto es sin atender a su naturaleza jurídica en particular ni a las consecuencias incluso de su consagración dentro del marco textual de la carta magna

b. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

El principio puede ser definido como el axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una determinada sociedad. Es decir, un principio tiene en definitiva, una función inspiradora, innovativa, e incluso interpretadora de las distintas normativas en la cual se fundamentan y surgen en una determinada sociedad.

Es así, que el principio constitucional es la regla básica que guía el coherente y eficiente funcionamiento de la sociedad, en un estado equilibrado de la estructura de la Constitución en un Estado determinado.

Al hacer el enunciado de *Principio Constitucional*, evidentemente son principios que se fundamentan en la Constitución, y por tanto, forman parte de una norma positivada u objetiva, nacional, ya que estos a su vez no pueden servir de base para la formulación de pretensiones jurídicas en la cual se pida o exija su aplicación directa.

c. LA DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS Y GARANTÍAS

Una primera distinción aparece según la real academia de la lengua española, en donde define: a la terminología “derecho”, según el ámbito jurídico, como aquel, “conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”.

Por otro lado, tenemos el término de garantía que es definido como aquella “cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad”.

Sin embargo, esta aproximación no ha de ser precisa, en tanto que, el mismo ente léxico internacional, define a la garantía constitucional como aquel conglomerado de “derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos”.

A pesar que se utilizan como sinónimos. En principio los derechos suponen atribuciones y las garantías son los medios para hacer efectivos los derechos. El derecho es lo protegido y la garantía la protectora. El sujeto tiene derecho a la información y la garantía es el habeas data. Pero hay situaciones en donde la diferencia se opaca, por ejemplo tiene derecho al

habeas corpus, equivale a tener derecho a ejercer la garantía del habeas corpus frente a una privación arbitraria de libertad. De manera que hay garantías que pueden ser vistas como derechos, y hay derechos que pueden ser vistos como garantías, por ejemplo el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo en juicio penal, puede ser visto como una garantía para asegurar la defensa.

1.3.6. ALCANCES DE LA INTEGRIDAD PERSONAL

a. INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

El derecho a la integridad de la persona o del ser, es un derecho inherente por su condición de ser vivo y así mismo, es un derecho que se desprende generalmente en tres acepciones, puntos que en definitiva merecen una protección integral y unitaria.

En cualquiera de las mismas se nos presenta como un típico atributo de exclusión, es decir, como un derecho que proscribe o prohíbe injerencias arbitrarias sobre la integridad, sea que estas provengan del Estado, de cualquier grupo humano o de algún individuo en particular.

Sostiene Quispe Correa (QUISPE CORREA, 2002) que, *“el derecho a la vida es, básicamente, la posibilidad real para desenvolverse a plenitud, no es la vida del esclavo, no es la vida miserable, sino que es, aunque resulte un pleonismo, el derecho a vivir”*.

El derecho a la *integridad personal* es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones.

La más caracterizada doctrina constitucional de nuestro país sostiene que el derecho a la integridad se refiere a la intangibilidad de los diversos elementos que componen la dimensión física de la persona humana.

b. INTEGRIDAD FÍSICA

La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas.

La integridad física pretende garantizar el estado de inalterabilidad del cuerpo de una persona o su buen funcionamiento desde el punto de vista fisiológico y garantizar dicho estado frente a conductas que atenten contra el mismo.

En doctrina se discute acerca de si dicho estado de inalterabilidad también involucra la buena salud de la persona. En lo particular pensamos que no, por cuanto dicho contenido, sin dejar de ser valioso, es abarcado por otro derecho, en este caso por el derecho a la salud reconocido en el Artículo 7º de la Constitución

En tales circunstancias el derecho comentado tiene un alcance mucho más específico, aunque no por ello y como luego se verá, menos plausible de ser destacado y protegido.

Otro aspecto que también se debate respecto de la integridad física son sus alcances como derecho individual. En efecto, si por este último, se entiende facultad de hacer o no hacer, o lo que es lo mismo, un atributo de libre disposición, se preguntan algunos si a nombre de dicha característica, puede su titular disponer libremente de su propio cuerpo y disponer incluso, a tal grado y nivel, que de la propia persona sea de quien dependa desnaturalizar o desarticular su propio cuerpo o alterar su normal funcionamiento.

Nuestro ordenamiento jurídico, en rigor, se ha decantado por la segunda corriente, como se desprende del *Artículo 6º del Código Civil* que regula los actos de disposición sobre el propio cuerpo en los siguientes términos:

“Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde

a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios”

El derecho a la integridad física, por lo demás, proscribiera de plano cualquier variante de tortura, buscando una protección integral del ser humano, y garantizando el desenvolvimiento del mismo en un ámbito de protección y satisfacción jurídica social

c. INTEGRIDAD PSICOLÓGICA

La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales.

La integridad psíquica, en cambio, hace referencia al estado de tranquilidad interior. Al contexto de normalidad en el que se desenvuelve el psiquismo o mundo interno de la persona y que por ser esencialmente individual corresponde prima facie ser valorado en sus alcances por su propio titular.

La integridad psíquica tiene pues, a diferencia de la integridad moral, implicancias hacia el ámbito interno, mientras que la integridad moral intenta garantizar el plano externo. Aun cuando ambas tengan que ver con lo que piensa o siente la persona, la distinción está en la incidencia o relejo hacia los ámbitos en los que se desenvuelve o vuelca sus experiencias el ser humano.

En tanto y en cuanto la integridad psíquica requiere un análisis a partir de lo que el propio individuo juzga contrario a este derecho, las conductas lesivas sobre el mismo imponen ser interpretadas, como ya se dijo, utilizando el enfoque del caso concreto. De este modo podría interpretarse como contrario a este atributo el comportamiento hostigador de un varón por sobre su pareja mujer (también, por cierto, la figura inversa), cuando dicha conducta hace materialmente imposible una relación en común. Evaluar cada supuesto requiere como es obvio, verificar las características del acto reclamado (constantes insultos, maltratos

injustificados, actitudes hostiles, etc.) en relación directa con lo que cada pareja concibe como rutinario de su relación.

A menudo se discute si las conductas violatorias de derechos resultan mucho más aflictivas a la integridad psíquica que a la integridad moral. Y razón no falta, pues aunque los atentados contra esta última suelen por lo general y salvo excepciones, superarse de una manera mucho más rápida, no ocurre lo mismo con los daños a la integridad psíquica que en muchos casos pueden prolongarse por bastante tiempo o incluso generar secuelas de evidente irreparabilidad.

1.3.7. GARANTIAS PERSONALES – DIRECTIVA 0010 – 2015 – ONAGI – DGAP.

a. DEFINICIÓN :

Según la directiva ONAGI (2015) las Garantías Personales son medidas preventivas que el Estado Otorga a los ciudadanos de manera inmediata ante cualquier acto de amenaza, coacción, hostigamiento, violencia o violencia familiar u otros que atentan la integridad, la paz y la integridad, la paz y la tranquilidad de las personas, consagrados en la Constitución Política del Perú. (Interior D. G., 2015)

a. REGULACIÓN JURÍDICA

Las garantías personales se encuentran reguladas por las “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Garantías Personales”, del año 2015, la cual se basa en su DIRECTIVA N° 010-2015- ONAGI-DGAP (DGGI) elaborado por, Dirección General de Autoridades Políticas de la Oficina Nacional de Gobierno Interior , (ONAGI) y que la finalidad fortalecer la presencia del Estado , especialmente en las zonas más alejadas con el propósito de proteger a las personas contra cualquier situación de riesgo. Según la Resolución Jefatural N° 251 – 2015-ONAGI-J, que aprueba la Directiva N° 0004-2015-ONAGI-OGPP.sobre “Lineamientos para la formulación, tramitación, aprobación y modificación de Directivas en la Oficina Nacional de Gobierno Interior.

b. LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN

La solicitud de garantías personales se presenta por escrito ante el Gobernador Distrital en el lugar donde ocurrieron los hechos, narrando de forma concisa y precisa los motivos de lo solicitado, dicha solicitud debe contar con los siguientes requisitos:

a. Formato según lo establecido en el TUPA ONAGI

b. Copia de DNI O Carne de Extranjería.

La solicitud de garantías personas deberá acompañarse de medios de prueba: documentos, videos, fotografías, declaración de testigo y/u.

- Para solicitar garantías personales, en el caso que el solicitante no pueda ejercer sus derechos, podrá hacerlo mediante una carta poder simple a su apoderado, representante, si se tratase de un menor de edad, podrán ejercer su derecho a través de su representante legal o apoderado.

- Las garantías personales deben ser solicitadas en la Gobernación de su Distrito, pero en aquellos casos que el solicitante resida en zonas apartadas o este en situación de riesgo, se podrá presentar su pedido de garantías personas ante la Gobernación Distrital de su preferencia.

c. PROCEDIMIENTO

Según la directiva de la EX ONAGI, este determinado procedimiento se lleva a cabo según la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, teniendo en cuenta que deben recurrir al siguiente orden: primera Instancia el Subprefecto Distrital, Provincial o Regional; segunda Instancia el Prefecto Provincial o Regional o Director General de Gobierno Interior; y tercera Instancia el Director General de Gobierno Interior. Proceso

d. LA NOTIFICACIÓN

- Ingresada y registrada la solicitud de otorgamiento de garantías personales, se procede a programar, la fecha y hora de la audiencia, notificando en el acto al solicitante.
- Respecto al del denunciado se le hará llegar la notificación en un plazo no menos de tres (03) días hábiles antes de realizarse la audiencia. La notificación debe realizarse al domicilio del denunciado, señalado con anterioridad por el solicitante.
- Dichas notificaciones emitidas durante el procedimiento de otorgamiento de garantías, podrán ser tramitadas por el Gobernador, el personal administrativo, la Policía Nacional del Perú o por un servicio de mensajería postal, según lo establecido por la oficina Nacional de Gobierno Interior. (Interior, 2015)

e. AUDIENCIA

- Se realiza de acuerdo a la fecha y hora registrada por el Gobernador Distrital
- La audiencia se realiza en una fecha única.
- En el supuesto que no se presente el solicitante se declarará el abandono del procedimiento por parte del Prefecto Regional de La Libertad y concluirá en archivo.
- Si el denunciado no se presenta a la audiencia el Prefecto Regional dejara constancia y notificara a ambas partes, para presentar alegatos u ofrecer medios de prueba de actuación inmediata.
- En el caso que no se presente la parte solicitante a la audiencia, el Prefecto Regional de La Libertad o servidor designado para el desarrollo de la misma declarara el abandono del procedimiento y su archivo respectivo.

- Si ambas partes se presentan en la Audiencia, el Prefecto Regional de La Libertad o servidor designado para el desarrollo de la misma registrara los datos generales, invitando a que expongan los hechos, motivos de la controversia, no sin antes informar las reglas básicas de respeto mutuo, evitando cualquier tipo de manifestación hostil o violenta;
- Finalizado este acto, se invita a los interviniente a resolver su conflicto mediante la propuesta de Conciliación; si fuese aceptada por los intervinientes se suscribe el acta de conciliación y “compromiso de acuerdo

1.3.8. DERECHO COMPARADO

a. LA ORDEN DE ALEJAMIENTO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

El artículo 48° del Código Penal español configura la orden de alejamiento como una pena privativa de derechos. Jurídicamente esta orden de alejamiento configura la pena prohibiendo *que se aproxime o comuniqué el victimario con la víctima o con aquellos familiares que determine el juez.*

Es así que esta forma de prohibición limitativa de derechos, impone un límite al desplazamiento libre, estos es, con un fin de que la posible víctima quede protegida de una manera más efectiva y eficaz, sobre todo en la manera de que pueda ser víctima de la comisión de un delito, tipificados en el artículo 57 del Código Penal Español.

Esta medida protege de una gama de delitos positivados, dentro de los cuales están: Homicidio, Lesiones, Aborto, Torturas, La Intimidad, La Libertad Sexual, El Honor, Patrimoniales, Trata de Personas e incluso el Orden Socioeconómico.

Mediante esta medida, se impide a quien se le impone, poder tener un acercamiento al sitio en donde se encuentre la recurrente. A su vez, mediante esta medida, se impone una distancia con la finalidad de obtener una mayor protección a la víctima. Es de esta manera, que se

queda prohibida el acercamiento a la víctima, ya sea a su residencia, a su lugar de trabajo, o donde desarrolle cotidianamente sus actividades profesionales o cualquier otra índole teniendo en cuenta el criterio de habitualidad y también el de frecuencia; esto es sin importar si se realizan actos de recreación o aprendizaje en determinados espacios públicos o privados. Además mediante esta medida innovativa garantista, también protege el ámbito comunicacional, es decir, esta medida prohíbe además del acercamiento físico, también el aspecto comunicativo, ya sea por medios de comunicación social o elementos tecnológicos como el hostigamiento por correos, teléfonos móviles, entre otros. Esto también aplica a las terceras personas que pudieran hacer la función de intercomunicadores entre la víctima y el agresor o intimidador. Todas estas disposiciones se realizan en favor de una mayor protección de la esfera personal de la recurrente, así garantizando evidentemente una mayor eficacia en las disposiciones en materia de interrelación de la víctima.

Es de esta manera que frente a los posibles escenarios ya indicados, el Juez es quien determinará el alcance de esta imposición de orden de alejamiento, esto debe ser en razón a las circunstancias concomitantes y particulares de cada caso en concreto.

Citando un ejemplo, se puede fijar como parámetro para la aplicación de la orden de alejamiento, el grado de relación entre la víctima y el agresor, ya sea por el entorno social, o incluso el entorno familiar, su grado de arraigo domiciliario entre ambos, o el grado de frecuencia que poseen. Es entonces que a partir de estos escenarios, el Juez debe determinar la forma y tiempo en los cuales se podrán y no se podrán acudir.

Es necesario resaltar que esta medida también posee una naturaleza cautelar para el Código Penal Español, esto es en la forma en la cual el Juez puede disponer durante la instrucción de un caso particular para proteger a la víctima de posibles escenarios de represalias, amenazas o cualquier otro perjuicio personal.

b. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ARGENTINA

El Ordenamiento Normativo Argentino, dispone a la Ley N° 12569, actualizado mediante Leyes 14509 y 14657 cuyo texto se encuentra orientado a la aplicación normativa de violencia familiar, entendiéndose como *toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida,*

libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

El cuarto artículo de la Ley N°14509, está referido a las víctimas menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismas, siendo sus representantes legales o el Ministerio Públicos los obligados de hacer la denuncia, como también quienes se desempeñan en organismos asistenciales públicas o privadas cuando tengan conocimiento o indicios que pueda existir situaciones de violencia familiar.

Los Juzgados, Tribunales de Familia o los Juzgados de Paz, del domicilio de la víctima, asumen la competencia para conocer las denuncias que versen sobre hechos tipificados en la presente Ley. En estos casos no se necesitara el patrocinio de un letrado, sin embargo en cualquier instancia de admite la presencia de una persona o acompañante siempre y cuando sea solicitado por quien padece la violencia.

c. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ECUADOR

En Ecuador, tanto como en varios países del continente; las medidas de protección poseen una naturaleza cautelar, la cual solo pueden ser determinadas por un Juez, o Fiscal, o una autoridad pertinente.

En este país, se determinan las medidas cautelares y de protección dependiendo de las circunstancias concretas, es decir, frente a delitos determinados y situaciones específicas.

Una medida cautelar, tiene una finalidad garantista dentro de un proceso alterno, sin embargo, una medida de protección tiene la particularidad de que son medidas individuales que aseguran la protección de una determinada persona la cual recurre ante un despacho determinado para su imposición.

El Código Orgánico Integral Penal, dispone ciertas medidas cautelares que en fin aseguran la presencia de un investigado ante una autoridad competente, es decir, la puesta en disposición en todo momento del agente que contraviene el ordenamiento jurídico.

d. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN COLOMBIA

La legislación colombiana ha reconocido dentro de su amplitud de cuerpos normativos vigentes a la necesidad de las medidas de protección para garantizar la protección total de los derechos humanos, entre los cuales resaltan la integridad, ya sea física o psicológica.

Es así, que el Estado de Colombia ha reconocido a las Comisarias como un espacio de acceso a la tutela familiar, además de poseer un carácter interdisciplinario, y para esto lo faculta de distintas funcionalidades para diferentes problemáticas que afectan no solo a los ciudadanos de a pie, sino también a los que poseen la condición de familiares o esfera familiar, dado esto que mediante las normativas vigentes defiende y protege la unidad de la familia y así erradicando la violencia que se produce entre sus miembros.

Así mismo el Código Penal Colombiano tipifica a la violencia intrafamiliar como un delito no conciliable entre sus afectados. Es aquí donde aparece la figura del Juez de Control de Garantías, así como de la Fiscalía General, trabajando en conjunto para la erradicación de la violencia familiar.

Imposición de medidas

Para la imposición de las medidas de protección se pretende tener un acceso rápido y efectivo, por tanto son medidas de carácter de urgencia y su dictamen no consta de un tiempo prolongado. Estas medidas se desarrollan así:

- ❖ Dictar medidas provisionales en menos de 4 horas: Previstas para casos de urgencia. Los comisarios de familia pueden dictar el desalojo del agresor de la casa, mantenerlo aislado de su familia, prohibirle esconder o trasladar los niños y personas con discapacidad. También podrá ordenar que el victimario se someta a un tratamiento terapéutico, y que este asuma el costo de la asesoría jurídica del caso.

- ❖ En máximo 10 días, convocar a audiencia: Los comisarios de familia tendrán entre 5 y 10 días para convocar a una audiencia para resolver definitivamente el conflicto. El comisario debe tener en cuenta que la víctima de violencia intrafamiliar no está obligada a conciliar o a enfrentarse cara a cara con su agresor.
- ❖ Sanción al incumplimiento: Los comisarios pueden imponer multas en caso de que el agresor incumpla con las medidas de protección ordenadas. Si la conducta es reiterativa el comisario puede ordenar un arresto de entre 30 y 45 días al agresor
- ❖ La familia es el núcleo de la sociedad y el escenario principal de formación de los individuos y aunque su esencia es ser una institución de respaldo, convivencia y protección se pueden presentar diversas situaciones, como es el caso de la violencia intrafamiliar, que hacen necesario buscar resguardo en otra parte. Por eso en este artículo te explicamos qué medidas de protección puedes pedir en caso de una situación de maltrato.

Según la ley 1257 de 2008, toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir una medida que tienda a protegerlo de manera inmediata.

- ❖ Los cónyuges o compañeros permanentes.
- ❖ Los descendientes o ascendientes de estos.
- ❖ Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.

Esta medida de protección puede ser denuncia vía verbal o escrita ante la Comisaria de Familia, y ante la falta de este, también se puede dirigir subsidiariamente ante un Juez Civil competente o un Juez Municipal. Las medidas tendientes a garantizar la protección de la persona son variadas y extensas, de manera tal que se abren diferentes posibilidades para cada caso en especial. Estas son:

- ❖ Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza.
- ❖ Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, siempre y cuando la autoridad lo considere necesario.
- ❖ Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas.
- ❖ Obligación de acudir a un tratamiento terapéutico a costa del agresor.
- ❖ Se puede ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
- ❖ Si la violencia intrafamiliar es constante, se puede pedir una medida de protección por parte de las autoridades de policía.
- ❖ Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad;
- ❖ Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas.
- ❖ Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas.
- ❖ Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias.
- ❖ Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar.
- ❖ Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro. Esta medida será decretada por autoridad judicial.
- ❖ Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;
- ❖ Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley

1.3.9. LAS MEDIDAS DE PROTECCION

a. CONCEPTO

Las medidas son mecanismos especiales de protección, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional.

Su particular naturaleza viene dada por la pretensión de proteger los derechos humanos fundamentales, considerando bienes jurídicos de relevancia para la sociedad, entre otros a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial.

La violencia familiares un atentado directo contra estos derechos, establecidos como prioritarios. Por lo tanto, se debe actuar con diligencia para evitar todos los tratos crueles y degradantes que implica para la víctima el estar sometida a la violencia.

También podemos afirmar que estas medidas tienden a la satisfacción de necesidades urgentes ante la inminente necesidad de protección a la víctima.

b. OBJETIVO

Es una forma sui géneris y excepcional, de tutela diferenciada en sede Fiscal, que brinda el Estado, de manera extrajudicial y rápida, como parte de una política social.

La finalidad de la medida de protección es garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la presunta víctima” (art. 13 Directiva 005-2009-MP-FN).

“Busca prevenir y/o evitar el surgimiento de los ciclos de violencia familiar, y disminuir los efectos de las agresiones intrafamiliares”.

c. CARACTERISTICAS

✓ CONGRUENTES

Debe considerarse las condiciones particulares de la persona víctima. (Edad, discapacidad funcional, otros factores.)

✓ OPORTUNAS

Debe determinarse oportunamente y evitar así mayor riesgo en la víctima.

✓ PROVISIONALES

Las medidas de protección tienen un carácter provisional sin que impliquen una declaración, modificación o extinción de un derecho o bien, una definición de certeza de una situación jurídica, pues su subsistencia dependerá de la existencia de un proceso, y de lo que en este se resuelva.

✓ OBLIGATORIAS

En caso de incumplirse con su mandato, procede la intervención del Ministerio Público.

✓ TUTELARES

El operador judicial debe garantizar mediante acciones afirmativas condiciones de igualdad real en el acceso a la justicia para cualquier tipo de víctima.

✓ PERSONALISIMAS

En virtud de esta característica las medidas de protección no pueden transmitirse de modo alguno.

✓ **IRRENUNCIABLES**

Al ser impuestas por una autoridad competente, frente a un probable o eminente hecho lesivo, estas tienen un carácter provisorio.

✓ **VARIABLES**

Las medidas de protección son variables, el operador judicial puede modificarlas y ampliarlas cuando así lo requiere la protección a la víctima.

✓ **NO PRODUCEN COSA JUZGADA**

La naturaleza temporal de las mismas no lo permite.

d. REQUISITOS PARA MEDIDAS DE PROTECCION

Las medidas cautelares son aquellos instrumentos procesales encaminados principalmente a asegurar y/o garantizar la eficacia o el cumplimiento efectivo de la sentencia.

Siendo, tradicionalmente, necesarios para su adopción dos presupuestos esenciales:

❖ *El fumus boni iuris, o fumus commissi delicti*

Probabilidad o verosimilitud de la existencia de un hecho criminal imputado, es decir, que existan indicios suficientes que permitan mantener la imputación de un hecho delictivo al sujeto afectado por la medida o la responsabilidad de este. Así mismo, para MONROY PALACIOS; la razón de ser de la verosimilitud, llamado *fumus boni iuris*, es que se requiere para la obtención de la medida cautelar es una situación de urgencia (MONROY PALACIOS, 2002).

❖ *El periculum in mora o periculum libertatis*

Para PRIORI POSADA, el peligro en la demora es el interés específico que justifica la emanación de cualquiera de las medidas cautelares. El peligro en la demora configura el interés para obrar, necesario para obtener del órgano jurisdiccional el dictado de una medida cautelar (PRIORI POSADA, 2006).

Por tanto es un daño jurídico específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional penal, que puede aprovecharse por el imputado para colocarse en tal.

En tercer lugar, medidas de protección son las que, con independencia de los avatares del proceso, se dirigen principalmente a garantizar la seguridad del sujeto pasivo de estas (víctima) frente a unas futuras y probables agresiones. Situación que frustrare la ulterior efectividad de las sentencias, peligro que puede referirse tanto a la persona como al patrimonio del imputado

e. AUTORIDAD COMPETENTE

Las autoridades competentes para dictar las medidas de protección son:

- ❖ El Fiscal de Familia: *Art. 10° del TUO de la ley 26260*
- ❖ El Juez Especializado: *Art. 21° del TUO de la ley 26260, y art. 16° del Reglamento de la ley 26260.*
- ❖ El Juez Penal: *Art. 26° del TUO de la ley 26260*
- ❖ El Juez de Paz Letrado: *Art. 26° del TUO de la ley 26260*

f. CLASES DE MEDIDAS DE PROTECCION

Por la Funcionalidad:

Existen las Típicas: Concordancia con el art. 10° del TUO de la ley 26260

- *Retiro del agresor del domicilio*
- *Prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima*
- *Suspensión temporal de visitas*

- *Inventarios sobre sus bienes.*
- *Suspensión del derecho de tenencia y porte de armas.*

Y las Atípicas: Concordancia con el art. 10° del TUO de la ley 26260

- *Otras que garanticen la integridad física psíquica y moral de la víctima (prohibición de ingreso al domicilio familiar en estado de ebriedad, etc. Se debe ser creativo, pro activo –fomentar redes de protección-)*

Por su Originalidad:

- Dictaminadas por Autoridad Fiscal (urgentes)
- Dictaminadas por Autoridad Judicial (trascendentales)

1.3.10. MEDIDAS DE COERCIÓN

Las medidas de coerción comprenden una serie de medidas sobre el sujeto inculcado y sus bienes; puede tratarse sobre su libertad persona o sobre la disponibilidad de sus bienes, asimismo son medios de naturaleza provisional con la finalidad de salvaguardar los fines del proceso penal

Según nuestra legislación, existen dos tipos de medidas de coerción:

a. MEDIDAS DE COERCION PERSONAL:

✓ DETENCION PRELIMINAR

Es la privación de libertad aplicada al sujeto procesado para hacerlo intervenir y recibir su declaración, cuando se aprecie que no acatará la orden de citación o intentara entorpecer la investigación”. Asimismo la detención del sujeto, es una grave afectación a la libertad transitoria, entonces afirmamos según García Morales A., “ (GARCIA MORALES, 2018)

✓ PRISION PREVENTIVA

Es una medida excepcional que a pedido de un fiscal, puede ser dictada por un juez para que la persona a pesar de no haber sido condenada por un delito, ingrese a un centro penitenciario y permanezca allí durante el tiempo solicitado por el fiscal ante el juez ,

El Juez dictara mandato de prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público atendiendo a la concurrencia de los presupuestos señalados en el artículo 268 de Código Procesal Penal. Estos son:

1. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad.
3. Que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

✓ LA COMPARECENCIA

Según Pablo Sánchez “ Es una medida de coerción personal de menor intensidad que la prisión preventiva y que normalmente se aplica para casos en donde las necesidades de aseguramiento del imputado no son tan rígidas o de los delitos no son estimados graves o siendo de gravedad no se satisfacen los requisitos para imponer un mandato de prisión preventiva” (SANCHEZ VELARDE, 2018)

Existen dos tipos de comparecencia:

- Comparecencia simple: El procesado solo tiene la obligación de presentarse ante la autoridad pertinente (el juez), toda la vez que este lo considere pertinente.
- Comparecencia con restricciones: Esta medida es más severa, toda vez que el procesado debe seguir determinadas reglas u obligaciones, bajo apercibimiento de revocársela la medida por prisión preventiva.

✓ **LA INTERNACION PREVENTIVA**

Lo encontramos en el artículo 293° del Código Procesal Penal y es impuesta por el Juez de Investigación Preparatoria para recluir en un establecimiento psiquiátrico a todo procesado que padezcan de enfermedades psiquiátricas, asimismo se realizara previa comprobación por un dictamen pericial donde se argumente de forma fehaciente sobre la grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que padece el procesado.

✓ **SUSPENSION PREVENTICA DE DERECHOS**

Según Alonso Raul Peña Cabrera sostiene “consiste en la sanción que priva y restringe (temporal o definitivamente) el agente de un determinado derecho civil o político, cargo función o empleo que fue instrumentalizado para cometer el hecho punible” (PEÑA CABRERA, 2018)

b. MEDIDAS COERCITIVAS REALES

✓ **EL EMBARGO**

Esta medida de carácter real, toda vez que recae sobre los bienes del imputado u procesado, para asegura la pena de la multa, siendo un embargo civil o penal, asimismo tiene como

finalidad la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva del imputado.

✓ **DESALOJO**

Esta medida de carácter real, tipificado en el artículo 311 del Nuevo Código Procesal Penal, se aplica en los delitos de usurpación. En los delitos de usurpación, el juez por interés del fiscal o del agraviado podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble ocupado por un plazo de veinticuatro (24) horas, siempre que existan argumentos, motivos razonables que haya valorado el juez durante el proceso del mismo.

✓ **INCAUTACION**

Llamado incautación o secuestro reside en la retención de un objeto por mandato judicial, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de su función, pueden ser incautados los instrumentos u objetos del delito permitido por la Ley, siempre que exista peligro por la demora.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Ha sido eficaz la aplicación de la directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP en la protección de los derechos a la integridad física y psicológica de las personas, en la Prefectura Regional de la Libertad?

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Impacto social: Con esta investigación se orienta básicamente a desplegar un manto protector hacia la víctima de hechos que atentan su integridad psíquica y psicológica, siendo el Estado como responsable de nuestra seguridad que, disperse los esfuerzos necesarios para garantizar nuestra integridad cuando esta se vea amenazada, contribuyendo de esta manera a la seguridad de miles de personas que solicitan garantías personales.

Impacto Jurídico: En la presente investigación se busca analizar e identificar la problemática renacida en la eficacia de la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP sobre el otorgamiento de las garantías personales en la región de La Libertad, toda vez que a pesar de ser otorgadas, no amparan los derechos a la integridad psicológica y física del administrado.

Impacto económico: Con la presente investigación se generaría un impacto económico, toda vez que al emitir una resolución eficaz, se previene y erradica todo acto de violencia producida en el ámbito público. Evitando que el Órgano Jurisdiccional tanga más carga procesal, ya que la Prefectura Regional de la Libertad tutelaría los derechos fundamentales.

Impacto Político: Esta investigación generaría un impacto político, en el cual se busca una mejor protección al administrado que asimismo es el quien busca el otorgamiento de garantías personales para proteger su integridad psíquica y física , pretendiendo la modificación de la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP sobre el otorgamiento de las garantías personales en la ciudad de Trujillo.

1.6. HIPÓTESIS:

Ha sido Ineficaz la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP en la protección de los derechos a la integridad física y psicológica de las personas, en la prefectura regional de La Libertad, año 2017, porque se trata de un procedimiento aislado carente de medidas de protección que permitan hacerlas efectivas.

1.7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

La presente investigación busca establecer la ineficacia de la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP en el otorgamiento de garantías efectivas para la protección de los derechos
LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar si la inexistencia de medidas de protección, asociadas a las garantías solicitadas, limita la efectividad de las garantías otorgadas.
- Determinar si la inexistencia de medidas de coerción contra quienes realizan agresiones o amenazas contra la integridad de las personas, impide o limita la eficacia de las garantías otorgadas.

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación tienen connotación de naturaleza cualitativa, toda vez que se busca determinar eficacia de la directiva N ° 0010 – 2015- ONAGI – DGAP - en la protección de la integridad de las personas en la región de la libertad.

2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION

a. VARIABLES

➤ Variable Independiente:

La eficacia en el otorgamiento de garantías personales a través de la DIRECTIVA 0010-2015-ONAGI – DGAP.

➤ Variable Dependiente:

La protección al derecho de la integridad física y psicológica.

b. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION
VARIABLE INDEPENDIENTE : La eficacia en el otorgamiento de garantías Personales	Es la materialización del otorgamiento de garantías personales hacia el administrado quien en el proceso es la parte solicitante,	. Se estudiará la DIRECTIVA 0010 – 2015 – ONAGI –	. Analizar la materialización de la eficacia en el otorgamiento de las	Dado a que se investigará la legislación nacional y los problemas en concreto del

a través de la DIRECTIVA 0010-2015-ONAGI – DGAP.	toda vez que solicita dichas medidas preventivas ante una vulneración a su integridad psíquica y física.	DGAP, que regula la responsabilidad del Prefecto, asimismo las resoluciones que estiman el otorgamiento de garantías personales.	garantías personales, asimismo también se analizará las facultades de la persona quien emite las resoluciones.	objeto del tema, es por esta razón que no se partirá de una cuantificación sino cualificación de los documentos revisados y analizados
VARIABLE DEPENDIENTE: La protección al derecho de la integridad física y psicológica.	El derecho a la integridad personal es aquel derecho fundamental que tiene como principio el respeto a la vida y su libre desarrollo.	Se estudiará la normativa nacional e Internacional que regula el escenario constitucional en cuanto a la protección al derecho de la integridad física y psicológica.	Se analizará los daños causados en el administrado, toda vez que solicita las garantías personales motivado en la vulneración de sus derechos fundamentales como la integridad física y psicológica	

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

a. POBLACIÓN

Para el desarrollo del presente trabajo no existe población puesto que el diseño de investigación es cualitativo.

b. MUESTRA

La presente investigación no existe muestra de estudio, puesto que es de diseño cualitativo

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

<u>TÉCNICA</u>	<u>INSTRUMENTO</u>
ENTREVISTA A ESPECIALISTAS:	<u>Guía de entrevista:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Entrevista a expertos en Derecho Constitucional.▪ Entrevista a Trabajadores en la Prefectura Regional de La Libertad.
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:	<u>Guía de análisis de documentos:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Análisis a los expedientes de la Prefectura Regional de la Libertad..

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS:

Teorías Fundamentales:

Teoría de los Derechos Fundamentales

Alexy R. (1985) hace mención en esta teoría que su fin es investigar la organización tales como la de los conceptos de derechos fundamentales, con respecto a la influencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de la conceptualización de los derechos fundamentales.

a. Entrevista a Especialistas:

A través de este método me concederé entrevistas a conocedores de tema, como especialistas en derecho constitucional además de entrevistar a trabajadores de la Prefectura Regional de La Libertad, con la finalidad de recopilar datos importantes que enriquezcan la investigación y así, alcanzar una opinión, ya sea a favor o en contra, alcanzando de esta manera enriquecer los conocimientos respecto al tema materia de estudio. Con todo esto se pretende descubrir cimientos sólidos con algo de viabilidad respecto al tema propuesto.

2.6. ASPECTOS ÉTICOS

La presente investigación es idea del autor, asimismo respeto la autenticidad de los resultados y confiabilidad de los datos conseguidos.

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El propósito fundamental de esta investigación fue establecer la ineficacia de la Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP en el otorgamiento de garantías efectivas para la protección de los derechos LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA, considerando las variables sociales, generacionales y objetivas. Para dar respuesta a este planteamiento se seleccionó una muestra de 24 resoluciones emitidas por la Prefectura Regional de La Libertad.

A raíz de la propuesta en el tema introductorio de la presente tesis, es necesario realizar un contraste con los temas obtenidos a raíz de una investigación con la casuística derivada de la Prefectura Regional de La Libertad; es así que clasificamos a los 24 casos obtenidos como muestra:

1. Tocamientos Indebidos: 1 resoluciones
2. Agresiones: Nueve resoluciones
3. Hostigamiento: Doce resoluciones
4. Acoso: 2 resoluciones

Es necesario recalcar que la casuística proporcionada es de un número reducido a comparación de los diversos casos ingresados en la Prefectura Regional de La Libertad

DISCUSION DE RESULTADOS: ANALISIS

En este punto recalcamos a razón de los casos seleccionados aleatoriamente de que a raíz del flujo de casuística que se lleva a cabo día a día en la Prefectura Regional de la Libertad es necesario poner en conocimiento de la entidad gubernamental es un órgano en el cual muchos de los ciudadanos acuden a fin de encontrar una posible solución a sus problemas que ponen en peligro su integridad física y/o psicológica

Es así que existe un amplio rango de personas que solicitan el otorgamiento de garantías entre las cuales destacan mujeres en mayores proporciones, y a su vez una pequeña cantidad de personas en un vínculo familiar y/o extra social común.

Cabe resaltar como es la posible respuesta planteada como hipótesis a esta tesis de que en efecto las garantías personales es un medio ineficaz, esto es en concordancia a las resoluciones indagadas; ya que existe una evidente lesión a la unidad física y psicológica de las personas recurrentes a la identidad. Esto es en concordancia que las veinticuatro resoluciones obtenidas nos damos cuenta que ya existe una evidente lesión y, mediante las garantías personales, más que una prevención obtendríamos una posible no repetición y mayor aun, una no agravación de la conducta del ofensor hacia el recurrente.

Sobre las entrevistas realizadas : se entrevisto al Abogado Mariano Cruz Lezcano (Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cesar Vallejo), a la formulación de la primera pregunta ¿CONSIDERA USTED, QUE LAS GARANTÍAS PERSONALES QUE OTORGA LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD, SON INSTRUMENTOS EFICACES PARA TUTELAR LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL?, manifiesta “No. En definitiva, no se trata de instrumentos eficaces para tutelar la vida e integridad personal. La eficacia puede ser medida ex post a partir de la recolección de resultados; o bien, ex ante, a partir de la determinación de los instrumentos de los que está dotado el procedimiento de otorgamiento de garantías, su naturaleza y las potestades del órgano encargado de conferirla. El procedimiento es una suerte de trámite administrativo sin fuerza protectora; sin capacidad de coerción; en fin, un ritualismo formal que a nada conduce .En la actualidad, a propósito de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar, se comienza a tomar conciencia de cómo un conjunto de medidas garantistas y protectoras deben contar con órganos, instrumentos legales y presupuesto suficientes para dotar a las personas de garantías efectivas. Un órgano dotado de potestades suficientes, capaz de dictar medidas de protección y medidas cautelares, en caso de peligro para la vida y la integridad personal; un conjunto de instrumentos legales que asignen prerrogativas suficientes; y la dotación presupuestaria, que es necesaria para contar con especialistas capaces de dotar al acto del contenido suficiente para que deje de ser un

ritualismo inútil, son presupuestos de una protección y garantía eficaz de los derechos involucrados”.

En la segunda parte se formula ¿CREE USTED, QUE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE ATRIBUYEN FUNCIONES Y COMPETENCIAS A LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD SON SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA FUNCIÓN?, su respuesta fue : “No lo creo. Porque lo que se tiene establecido no es más que un ritualismo vacío, hueco, que no disuade; que no es efectivo, en la medida que la situación que conduce a la solicitud de garantías permanece inalterada, sin que se adopte una medida o un conjunto de medidas de real efectividad. Un potencial agresor, cuando el peligro es real, no se disuade por la circunstancia de ser amonestado por una autoridad. Cuando el riesgo es efectivo, lo que debe hacerse es poner a salvo al denunciante; dotarlo de las medidas protectoras que resulten necesarias hasta la remoción del peligro. Si el mecanismo adoptado no produce ese efecto, entonces, no es eficaz. Ahora bien, puede discutirse sobre cuál es el órgano llamado a ejercer las competencias necesarias para dotar garantías efectivas. La gobernación no parece, como órgano administrativo, la entidad más apropiada para ejercer facultades protectoras y coercitivas. La tradición establecida debe variar si es que el Estado tiene el propósito de brindar una garantía efectiva”.

En la ultima pregunta : ¿QUE MEDIDAS PODRÍAN RESULTAR APROPIADAS PARA OTORGAR UNA VERDADERA GARANTÍA PERSONAL A LA TUTELA DE LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL ANTE LA DENUNCIA SOBRE AMENAZA O SITUACIONES DE RIESGO? , responde : “La adopción de mecanismos de protección. Prohibición a la persona denunciada de acercarse a la víctima. La sola vulneración de ese mandato debe configurar la comisión de un delito. En casos graves, la dotación a la víctima de albergues o zonas de seguridad; en fin, un conjunto de medidas que respondan a las necesidades de protección y garantía de sus derechos que buscan las personas cuando acuden a la gobernación. Para ello se requerirá no solo atribuir funciones y competencias a órganos distintos; probablemente a jueces de paz; sino, además, contar con instrumentos legales y presupuestarios suficientes”.

En la entrevista realizada a Dalia Lopez Tirado (Ex .- Trabajadora de La Prefectura Regional de La Libertad, se realizo la pregunta : ¿CONSIDERA USTED, QUE LAS GARANTÍAS PERSONALES QUE OTORGA LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD SON INSTRUMENTOS EFICACES PARA TUTELAR LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL?, respondió : “No, ya que se ha dado casos que pese a que el demandante obtiene garantías personales, el denunciado sigue cometiendo actos de hostigamiento o amenazas y las personas seguían asistiendo a la prefectura para que esta entidad se pronuncia al respecto ,es decir, el agresor no cumplía con lo que manifestaba la resolución administrativa y seguía hostigando a la víctima así que se le informaba que vaya directo a fiscalía con la resolución donde se le estimaba las garantías personales”.

En la segunda pregunta ¿CREE USTED, QUE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE ATRIBUYEN FUNCIONES Y COMPETENCIAS A LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD SON SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA FUNCIÓN?, ella manifiesta : “No, debería de ver otro tipo de normatividad para que brinde otro tipo de facultades que sean medidas de protección más eficaces para garantizar la integridad psicológica y física del agraviado , ya que la directiva vigente solo hace referencia hasta la resolución, mas no manifiesta que es lo que pasaría si dicha resolución sea incumplida o si la victima siguiera en estado de riesgo”.

En la última pregunta ¿QUE MEDIDAS PODRÍA RESULTAR PARA OTORGAR UNA VERDADERA GARANTÍA PERSONAL A LA TUTELA DE LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL ANTE LA DENUNCIA SOBRE AMENAZA O SITUACIONES DE RIESGO?, ella manifiesta : “ Claro está que las garantías personas no son los medios de protección más eficaces , pero las medidas de protección emanadas del Poder Judicial podrían dar una efectiva tutela a los derechos fundamentales y salvaguardar la integridad personal de las víctimas de agresión”.

Se entrevistó al actual Sub Prefecto Provincial de Trujillo – Hector Leon Walde, se realizó la primera pregunta : ¿CONSIDERA USTED, QUE LAS GARANTÍAS PERSONALES QUE OTORGA LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD SON

INSTRUMENTOS EFICACES PARA TUTELAR LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL?, respondió : “ No, porque como lo dice la misma Directiva N° 0010-2015 – ONAGI – DGAP, es un proceso de carácter administrativo, la cual solo sirve para disuadir a la parte denunciada a fin de que cause los actos de agresión ya sean físicos o psicológicos”.

En la segunda pregunta ¿CREE USTED, QUE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE ATRIBUYEN FUNCIONES Y COMPETENCIAS A LA PREFECTURA DE LA LIBERTAD SON SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA FUNCIÓN?, el manifiesta: “No, porque dentro de la Directiva acotada tiene empirismos normativos, es decir que esta fue dada en el año 2015 y a la fecha no existen otros instrumentos como por ejemplo la Ley 30364”.

En la última pregunta ¿QUE MEDIDAS PODRÍA RESULTAR PARA OTORGAR UNA VERDADERA GARANTÍA PERSONAL A LA TUTELA DE LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL ANTE LA DENUNCIA SOBRE AMENAZA O SITUACIONES DE RIESGO?, el manifiesta : “ En principio una nueva Ley que establezca cuando se otorguen las garantías se comunique al ministerio público para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, por otro lado comunicar a la policía para que realice un patrullaje en la zona en donde vive la víctima y visite periódicamente al agresor haciéndole recordar las medidas optadas.”.

Respecto a la tercera pregunta los entrevistados concuerdan que estas garantías personales no salvaguardan la integridad personal de la víctima de agresión, además de no ser no es la entidad idónea para otorgar medios de protección, es decir si no existe el cumplimiento de las garantías personas , si no produce ese efecto, entonces, no es eficaz, se llega a la conclusión que la gobernación no parece, como órgano administrativo, la entidad más apropiada para ejercer facultades protectoras y coercitivas

IV. CONCLUSIONES

1. La Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP resulta ineficaz, en cuanto busca la protección de los derechos a la integridad física y psicológica, toda vez que no es la entidad idónea para poder emitir medidas que puedan proteger al solicitante.
2. Se determinó que la inexistencia de medida de protección asociadas a las garantías solicitadas si influye en cuanto a la efectividad de la protección del solicitante, porque al no tener como materializar la protección de estas garantías personas el agresor puede vulnerar los derechos que han sido violados y necesitan la protección del Estado.
3. Se determinó que la inexistencia de medidas de coerción contra quienes realizan amenazas hacia la integridad de las personas si impiden o limitan la eficacia de las garantías otorgadas a la víctima, toda vez que no es la entidad idónea correcta para salvaguardar el derecho a la integridad física y psicológica.

V. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Dirección General de Autoridades Políticas de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, que para una correcta protección de la integridad personal las garantías deberían ser otorgadas por una entidad idónea, que pueda ejercer protección hacia persona vulnerada.
2. Se recomienda la existencia de medidas de coerción contra quienes realizan agresiones e amenazas contra la integridad física y psicológica de las personas, toda vez que impiden su desarrollo y afecta de forma irremediable su integridad personal

VI. REFERENCIAS

- ABAD YUPANQUI, S. (2004). El proceso constitucional de amparo. *Gaceta Jurídica*, p. 50.
- Alexy, R. (2000). La institucionalización de los derechos humanos en el Estado constitucional democrático. *Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, p. 21.
- Alexy Robert (1985). Teoría de los derechos fundamentales. Alemania .Centro de Estudios Constitucionales.
- C. Grossman, P. Nikken. (1990). *Manual Internacional de los Derechos Humanos*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.
- CALDERON CUADRADO, R. (1992). *Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil*. Madrid: Editorial Madrid.
- Carbonell, M. (2013). Derechos fundamentales y democracia. *Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática*, p. 75 - 76.
- Carpio Marcos, E. (2000). *El significado de la cláusula de los derechos no enumerados*. Ciudad de Mexico: Cuadernos Constitucionales.
- EGUIGUREN PRAELI, F. (2002). *Estudios constitucionales*. Lima: Ara Editores.
- FERNÁNDEZ SESSAREGO, C. (1996). Daño al proyecto de vida. *Studi in onore di Pietro Rescigno*, 20.
- FERNANDEZ SESSAREGO, C. (2003). *Libertad, Constitución y Derechos Humanos*. Lima: Editorial San Marcos.
- GARCÍA BELAUNDE, D. (1994). El hábeas corpus en América Latina. Algunos problemas y tendencias recientes. *"Ius et Veritas"*, p. 9.

- GARCÍA BELAUNDE, D. (1994). Garantías constitucionales en la Constitución peruana de 1993. *Lecturas sobre temas constitucionales*, 261.
- I.D.H., C. (13 de Noviembre de 1985). La colegiación obligatoria de periodistas². *Opinión consultiva OC-5/85* (pág. párr. 52). San José: Serie A.
- Interior, D. G. (2015). *Directiva N° 0010 - 2015 - ONAGI*. LA LIBERTAD .
- Interior, D. G. (27 de Noviembre de 2015). *Perú - Ministerio del Interior*. Obtenido de <http://www.onagi.gob.pe/portal/normatividad/detalle/dir>
- Jiménez De Aréchaga, E. (1988). La Convención Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno. *Revista IDH*, 25 - 41.
- MONROY PALACIOS, J. J. (2002). *Bases para la formación de una Teoría Cautelar*. Lima: Comunidad.
- Página Oficial de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. (2016) Antecedente: Dirección Nacional de Gobierno Interior – DGGI. Recuperado de <http://www.onagi.gob.pe/portal/onagi/detalle/Resena/8>
- Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. Pág. 37)” (fundamento número dos, primer párrafo
- PÉREZ LUÑO, A. E. (1986). *El derecho de hábeas corpus*. Madrid: Congreso de los Diputados.
- PÉREZ LUÑO, A. E. (1986,). *El derecho de hábeas corpus*.
- PRIORI POSADA, G. (2006). *La tutela cautelar: su configuración como derecho fundamental*. Lima: ARA Editores.
- QUISPE CORREA, A. (2002). *Los derechos humanos* . Lima: Gráfica Horizonte .

SARTRE, J. P. (1949). *El ser y la nada*. Buenos Aires: Ibero-Americana.

SOLOZABAL ECHAV ARRÍA, J. J. (1991). Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales. *Revista de Estudios Políticos*, p. 92.

SORIA LUJÁN, D. (Año III). El proyecto de ley de protección a /o libertad personal. *Pensamiento Constitucional*, p. 380.

Tesis elaborada por el autor León Walde, Héctor León (2017) en la **Universidad Señor de Sipan** , para obtener el grado de abogado , tesis que tiene como título denominado: **“LOS EFECTOS E INEFICACIA DE LAS GARANTÍAS PERSONALES COMO DERECHO FUNDAMENTAL OTORGADAS POR LA PREFECTURA REGIONAL DE LA LIBERTAD”**, quien concluye lo siguiente

Tesis elaborada por el autor Viviane Salli Castillo Benites (2014) en la **Universidad Cesar Vallejo**, para obtener el grado de **ABOGADO “EFICACIA DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS.**

VILLÁN, C. (2009). La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 60° aniversario: origen, significado, valor jurídico y proyección en el siglo XXI. *La Declaración Universal de Derechos Humanos: Reflexiones*, p. 557.

VILLÁN, C. (2011). La protección internacional de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. *Instituto Internacional de Derechos Humanos*, p. 8 - 9.

VII. ANEXOS

“EFICACIA DE LA DIRECTIVA N ° 0010 – 2015- ONAGI – DGAP - EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD

ENTREVISTADO:

CARGO:

FEC HA:

1 -. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS GARANTÍAS PERSONALES QUE OTORGA LA GOBERNACIÓN SON INSTRUMENTOS EFICACES PARA TUTELAR LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL?

RPT: _____

2 .- ¿ CREES QUE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE ATRIBUYEN FUNCIONES Y COMPETENCIAS A LA GOBERNACIÓN SON SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA FUNCIÓN?

RPT: _____

3 – ¿QUE MEDIDAS PODRÍA RESULTAR PARA OTORGAR UNA VERDADERA GARANTÍA PERSONAL A LA TUTELA DE LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL ANTE LA DENUNCIA SOBRE AMENAZA O SITUACIONES DE RIESGO?

RPT: _____

